

## Artículo 41

**Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.**

El origen de la amplia legislación española en materia social debe buscarse, a finales del siglo XIX, en la formación de la Comisión de Reformas sociales (1883-1903), iniciativa del ministro Segismundo Moret. Le seguirían el Instituto de Reformas Sociales (1903) y el Instituto Nacional de Previsión (1908), mientras que en el plano legislativo destacan en este primer momento la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900 y el Retiro Obrero Obligatorio, de 1919, donde se optó claramente por un sistema contributivo. Tras estos primeros pasos, los mecanismos protectores desembocaron en un conjunto de seguros sociales, entre los que destacaban el Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE) de 1942 y el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) de 1947, cuyas prestaciones se mostraron pronto claramente insuficientes, según opinión extendida en la doctrina. Surgieron luego nuevos mecanismos de protección, articulados a través del Mutualismo Laboral, (Reglamento de 1954), que trataba de complementar la protección preexistente, se organizaba por sectores laborales e incluía prestaciones que guardaban ya cierta relación con los salarios, si bien adolecía de graves disfunciones desde el punto de vista de la protección, de las finanzas y de la gestión.

Por último, la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963, marcó el tránsito desde los seguros sociales al sistema de Seguridad Social. El objetivo principal de esta ley era, en efecto, la implantación de un modelo unitario e íntegro de protección social, con una base financiera de reparto, gestión pública, sin ánimo de lucro y con participación del Estado en la financiación. Todos estos principios tuvieron su plasmación legal en la Ley de Seguridad Social de 1966, que no pudo alcanzar la eficacia perseguida, al reconocer prestaciones de cuantía insuficiente

Este artículo posee una importancia fundamental en nuestro ordenamiento constitucional ya que intenta promover que vivamos en un ambiente sano, equilibrado y apto para las actividades productivas.

Entre las prestaciones más destacadas de nuestro régimen de Seguridad Social figuran las siguientes: derecho a la asistencia sanitaria, al reconocimiento de la incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y lactancia, permisos de descanso por maternidad y paternidad, pensiones por invalidez, derecho a la jubilación, etc. Con todo, echamos en falta una mayor intervención del Estado en cuestiones tales como la organización de comedores sociales o la promoción de vivienda de protección oficial.

Los fraudes a la Seguridad Social merecen nuestra condena porque suponen una estafa que nos afecta a todos. Por ejemplo, investigando, hemos visto que el 16 de octubre de 2018 se destapó un fraude, por valor de más de 3 millones de euros, entre administradores de este servicio en Zamora (<https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1210279/policia-nacional-destapa-fraude-seguridad-social-zamora-31-millones-euros>): desde 2007, todo un entramado empresarial, dedicado al sector maderero, eludía el pago de seguros a la Tesorería de la Seguridad Social. Para ello utilizaban indistintamente los mismos proveedores, los mismos trabajadores que intercambiaban entre empresas, la misma materia prima, la misma maquinaria, etc.

Como conclusión, creemos que la asistencia sanitaria privada es más rápida que la pública, pero la calidad de los servicios públicos es superior.

Álvaro M., Nayan R., Zaira F., Enrique S., Roger R. y Benjamín L. (3º A)